



Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA

EXPEDIENTE No.: 11001-33-35-010-2022-00139-00
ACCIONANTE: CÉSAR ANTONIO COHECHA LEÓN
ACCIONADAS: CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONCEJO DE BOGOTÁ
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA
CLASE: ACCIÓN DE TUTELA

Procede el Despacho a decidir sobre la remisión de la acción de tutela del asunto, por competencia.

I). El accionante **CÉSAR ANTONIO COHECHA LEÓN** identificado con cédula de ciudadanía 80.243.386, interpone la presente acción constitucional en procura de la protección de los derechos fundamentales de acceso o elección en cargos públicos, igualdad, trabajo, debido proceso y petición, en contra de las siguientes autoridades:

- CARLOS FELIPE CORDOBA LARRARTE, en su condición de CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
- JULIÁN MAURICIO RUIZ RODRÍGUEZ, en sus condiciones de Contralor General de la República (e), Vicecontralor General de la República (e) y Director de la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República.
- SANDRA PATRICIA BOHÓRQUEZ GONZÁLEZ, en sus condiciones de Gerente Administrativa y Financiera de la Contraloría General de la República y delegada contractual y de la ordenación del gasto de ese órgano.
- CONCEJO DE BOGOTÁ D. C., corporación pública del orden distrital, en su condición de gestor de la convocatoria pública para la conformación de la lista de elegibles y elección de Contralor Distrital de Bogotá -periodo 2022-2025.
- UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, en su condición de operador de la citada convocatoria.

II). Sobre la competencia para conocer de las acciones de tutela, el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la misma, en el artículo 37 señala que son competentes a prevención todos los jueces o tribunales del territorio nacional donde hubiese ocurrido la violación o amenaza que motiva la presentación de la solicitud. A su turno, el Decreto 333 del 06 de abril de 2021, *"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela"*, dispone lo siguiente:

"Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:

"Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeran sus efectos, conforme a las siguientes reglas:

(...)



3. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones **del Contralor General de la Republica**, del Procurador General de la Nación, del Fiscal General de la Nación, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la Republica, del Contador General de la Nación, del Consejo Nacional Electoral, así como, las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud relacionadas con medidas cautelares y de toma de posesión e intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar, de cesación provisional, o de revocatoria total o parcial de habilitación o autorización de funcionamiento, con fundamento en los artículos 124 y 125 de la Ley 1438 de 2011, serán repartidas, a **los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos**.

(...)

11. Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez **de mayor jerarquía**, de conformidad con las reglas establecidas en el presente artículo.” (Resaltados del despacho).

III). Para el caso concreto, el Despacho constata que la acción está dirigida a cuestionar las acciones y/o omisiones de un número plural de autoridades públicas y entidades de distintos niveles como son la Contraloría General de la República, un ente universitario de carácter privado y una Corporación edilicia del orden distrital. Por consiguiente esta Agencia Judicial considera que no es competente para conocer la presente acción de amparo habida cuenta que acorde a lo dispuesto en la norma transcrita y dados los distintos niveles de las autoridades contra quien se dirige la acción, la competencia para resolver la tutela recae en el estrado judicial de mayor jerarquía, siendo para este caso el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y/o el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dado que uno de los accionados es la Contraloría General de la República y por el domicilio de las partes es dable inferir que la ocurrencia de la violación o amenaza que motiva la presentación de la solicitud es en la ciudad de Bogotá.

El Juzgado reconoce que la Corte Constitucional ha precisado que las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015 y demás normas de carácter reglamentario, en modo alguno constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. No obstante, en el Auto 216 de 2019 (MP. Diana Fajardo Rivera) la misma Corporación aclaró de manera reiterada que las consideraciones expuestas no impiden que la autoridad judicial que conozca un conflicto de competencia aparente, suscitado con base en reglas de reparto, devuelva el expediente al despacho al que le corresponda su conocimiento en virtud de tales reglas, así se modifique la asignación inicial, si se encuentra que se ha realizado un reparto caprichoso¹. Este ocurre cuando existe una “*manipulación grosera*”² de las reglas de reparto, que se presenta, por ejemplo, en el caso de una “*distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes*”³; o en aquel “*en que se reparta caprichosamente una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional del que dictó el proveído*”⁴

¹ Se aclara que los pies de página 1, 2 y 3 corresponden al Auto 216 de 2019, emanado de la Corte Constitucional. “Esta posición fue establecida por la Corte en el auto 124 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En esa ocasión, esa Corporación consideró que, si bien no es posible promover conflictos de competencia con base en las reglas de reparto, esto no lleva a desconocer su validez. Por consiguiente, “*deben ser seguidas obligatoriamente por las oficinas de apoyo judicial a la hora de distribuir las acciones de tutela entre los distintos jueces, de modo que, de ninguna forma, el reparto de los procesos debe ser caprichoso o arbitrario*”. Esta postura ha sido reiterada en el auto 198 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), que ha sido tenido en cuenta de manera continua por la Corte en los pronunciamientos subsiguientes y, más recientemente, en los siguientes autos: 365 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 378 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 525 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido; 588 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; y 293 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

² Auto 124 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

³ Auto 124 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

⁴ Auto 198 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. La Corte, incluso, ha llegado a sostener, en el auto 073 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), por ejemplo, que “*no es acertado que una autoridad par*”



Dado que en este caso no se observó la regla de reparto respectiva que asigna el conocimiento de la acción de tutela a los tribunales superiores de distrito judicial o tribunales administrativos, por estar dirigida entre otros contra las actuaciones del Contralor General de la República, es menester remitir el expediente al mencionado Tribunal Superior de Bogotá para que resuelva sobre la admisión de la acción de tutela.

En virtud de lo expuesto, el Despacho

RESUELVE:

PRIMERO: ABSTENERSE de conocer la presente acción de tutela por carecer de competencia.

SEGUNDO: REMITIR por competencia la acción de tutela instaurada por el señor CÉSAR ANTONIO COHECHA LEÓN, de manera inmediata a la OFICINA DE REPARTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión al accionante.

CUARTO: En caso de que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá no asuma la competencia para conocer de la acción de tutela, PROPONER CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIAS ANTE LA H. CORTE CONSTITUCIONAL para que resuelva lo pertinente.

QUINTO: Por secretaría, dejar las constancias respectivas y dar cumplimiento a lo aquí ordenado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

AUGUSTO LLANOS RUIZ
JUEZ

A.O.R.-

o de inferior categoría resuelva el amparo que se presenta contra por ejemplo un alto tribunal". Esta providencia se reitera en el auto 372 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo)."

3

Firmado Por:

Augusto Llanos Ruiz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo

010
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **cf8bc4f446301f76e9516d93698f183d2101e58080833b35edaf10277eee5b6e**
Documento generado en 04/05/2022 04:04:41 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>